



S!Paz

Vol. XXXI N° 1 – Marzo de 2026

ACTUALIDAD:

Seguridad en México

Avances mitigados

ENFOQUE:

Megaproyectos ferroviarios
en el sureste.

**Violaciones a derechos,
impactos
socioambientales y
militarización en
nombre del desarrollo**

ARTÍCULO:

SIPAZ

**Tres décadas de
presencia que
acompaña y esperanza
que florece.**

Entrevista a Jorge Santiago

SIPaz
30
Años



JUNTA DIRECTIVA DE SIPAZ

Gustavo Cabrera – Presidente

Servicio Paz y Justicia en América Latina, Costa Rica

Richard Stahler-Sholk –

Tesorero, Estados Unidos

Rev. Denise Griebler – Secretaria

Mayan Ministries, Estados Unidos

Josefine Sjöberg

Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), Suecia

Jenny Nemes

Colombia

Paula Bidle Moore

Illinois, Estados Unidos



Avenida Almolonga #40,
Barrio de Santa Lucía
CP 29250, San Cristóbal
de las Casas
Chiapas, México



(+52.967) 631 60 55



chiapas@sipaz.org
www.sipaz.org



sipaz.chiapas



sipaz.chiapas



@sipazchiapas

En 1994, después del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), organizaciones sociales y civiles, así como líderes religiosos mexicanos ratificaron la necesidad de una presencia internacional permanente en Chiapas para ayudar a detener o frenar los riesgos de salidas violentas al conflicto. En este marco, en 1995, organizaciones internacionales con una larga trayectoria en el campo de la paz, los derechos humanos y la No-violencia activa respondieron al crear una coalición de grupos de los Estados Unidos, Europa y América Latina. Compartían no nada más múltiples preocupaciones por la situación en Chiapas, sino también la esperanza de poder apoyar en la construcción de una paz justa y duradera en este estado. Eso dio origen al proyecto de SIPAZ (Servicio Internacional para la Paz).

Hoy en día, SIPAZ apoya la búsqueda de soluciones pacíficas y la construcción de una cultura de paz, diálogo y tolerancia entre actores en Chiapas y de forma creciente, en otros estados de México (Oaxaca y Guerrero). Al mismo tiempo, sirve de puente de comunicación e intercambio entre organizaciones y redes que trabajan por la construcción de una paz justa y verdadera a nivel local, nacional, regional e internacional ■

El Equipo Internacional de SIPAZ en Chiapas busca:

- Proteger y ampliar los espacios de actuación de los grupos sociales organizados en defensa de los derechos humanos y la paz.
- Sensibilizar a actores nacionales e internacionales para que realicen acciones de diplomacia para la Paz.
- Promover espacios de intercambio y articulación hacia la defensa de los derechos humanos y la construcción de una cultura de paz.
- Mantener diagnósticos y relaciones que permitan acciones oportunas encaminadas a ampliar el margen de acción de grupos locales organizados en la defensa de los derechos humanos y hacia la construcción de la Paz.
- Informar y formar a actores locales para que puedan fortalecer propuestas no violentas de defensa de sus derechos y promover una cultura de paz.

SIPAZ reconoce y respeta los principios de no intervención y soberanía del Estado mexicano y de sus ciudadanos, de quienes debe depender la iniciativa para alcanzar la solución a los conflictos ■

4

ACTUALIDAD:
Seguridad en México
Avances mitigados



14

ENFOQUE:
Megaproyectos ferroviarios en el sureste.
Violaciones a derechos, impactos socioambientales y militarización en nombre del desarrollo

24

ARTÍCULO:
SIPAZ
Tres décadas de presencia que acompaña y esperanza que florece.
Entrevista a Jorge Santiago

28

Actividades de SIPAZ
De mediados de noviembre de 2025 a
mediados de febrero de 2026



SIPaz
30
Años

Seguridad en México

Avances mitigados

La migración y la seguridad fronteriza vienen siendo temas centrales en las relaciones entre México y Estados Unidos, aunque no siempre aparecen en el foco de las noticias; históricamente, han influido en el tono de la relación y representan un elemento de presión significativo hacia México. Ciertamente, el comercio bilateral sigue siendo muy importante (con México como uno de los principales socios comerciales de EE. UU.), lo que obliga a mantener canales de diálogo, aun cuando hay desacuerdos, en particular ante la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en julio próximo.

Por otro lado, han surgido tensiones. Un supuesto cierre temporal del aeropuerto de El Paso, por un posible dron relacionado con cárteles, generó tensión diplomática. EE. UU. atribuyó el cierre a un dron; el gobierno mexicano señaló que pudo haber sido un ejercicio militar. Asimismo, el país envió ayuda humanitaria a Cuba en un contexto de san-

ciones de EE. UU. contra la isla. Esto ha puesto a la administración en una posición de equilibrio diplomático —tratando de mantener relaciones con Cuba sin enemistarse con Washington—. En múltiples ámbitos, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum intenta mostrar firmeza

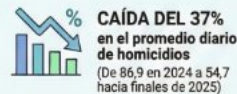
Seguridad en México: Balance de Avances y Desafíos Críticos (2025-2026)

Dualidad de la situación: reducción histórica de homicidios frente al preocupante aumento de desapariciones y violencia de género.

LOS AVANCES: REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA LETAL



17,5 Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025 (Más baja desde 2015)



CAÍDA DEL 37% en el promedio diario de homicidios (De 86,9 en 2024 a 54,7 hacia finales de 2025)

23.374 HOMICIDIOS TOTALES EN 2025

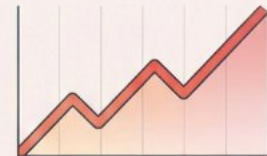
Estimaciones oficiales preliminares muestran una reducción sustancial comparada con los niveles de años anteriores.

ESTRATEGIA Y CAMBIO INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD 2024-2030

Enfoque en atender causas estructurales (pobreza y exclusión) mediante coordinación interinstitucional y programas de bienestar.

LOS DESAFÍOS: DESAPARICIONES Y VIOLENCIA DE GÉNERO



200% Aumento en desapariciones en la última década (A pesar de la baja en homicidios, el fenómeno sigue creciendo de forma alarmante)



MÁS DE 130.000 PERSONAS DESAPARECIDAS DESDE 2012

(Crítico en estados como Sinaloa, Sonora y Baja California Sur)

10 MUJERES ASESINADAS CADA DÍA

Estimaciones mantienen niveles críticos de violencia contra las mujeres e impunidad, aunque faltan cifras consolidadas de 2025.

CRISIS Y TRANSICIÓN



CONSOLIDACIÓN DE LA MILITARIZACIÓN

Transferencia del control de la Guardia Nacional al Ejército, medida criticada por defensores de derechos humanos.



TRANSICIÓN EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (FGR)

Renuncia de Alejandro Gertz Manero tras 7 años, transición a cargo de Ernestina Godoy mientras el Senado elige sucesor permanente.

Nota: El panorama de seguridad en México durante 2025 y principios de 2026 presenta una realidad de contrastes, enmarcado en la "Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030" y una transición institucional clave.

NotebookLM

Infografía creada con asistencia de IA (NotebookLM) © SIPAZ



Memoria que busca, Tuxtla Gutiérrez, septiembre de 2025
© SIPAZ

sin romper equilibrios con EE. UU., con esfuerzos por evitar confrontaciones directas, pese a desacuerdos en varios temas, incluyendo declaraciones del presidente Donald Trump, que proponían o amenazaban con intervenir directamente en México.

México puede presumir algunos avances ante la inseguridad, por lo menos en la reducción de homicidios: en 2025 México registró alrededor de 23.374 homicidios, una reducción respecto a años recientes, con una tasa de aproximadamente 17,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la más baja desde 2015, según estimaciones oficiales preliminares. El promedio diario de homicidios disminuyó desde 86,9 por día en 2024 a cerca de 54,7 por día

hacia finales de 2025, lo que representa una caída de cerca del 37 %.

No obstante, organizaciones como México Evalúa señalan que las desapariciones han crecido de manera considerable, con cifras que muestran aumentos de más del 200 % en la última década, aunque los datos oficiales varían según el método de conteo. Se estima que más de 130.000 personas están desaparecidas en México desde 2012. Sinaloa, Sonora y Baja California Sur figuran como las entidades con las tasas más altas de personas desaparecidas y no localizadas en 2025, aunque el problema se extiende fuera de zonas tradicionalmente asociadas al crimen organizado. Asimismo, incidentes aislados de violencia armada

continúan ocurriendo en varios estados (por ejemplo, ataques contra convoyes y enfrentamientos entre grupos criminales). Finalmente, México sigue enfrentando altos niveles de violencia contra mujeres: aunque no hay cifras oficiales completas de 2025 todavía consolidadas, estimaciones indican que alrededor de 10 mujeres son asesinadas cada día.

El Gobierno federal está impulsando la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, que plantea que la paz se construye atendiendo las causas estructurales del delito: pobreza, desigualdad, exclusión y falta de oportunidades, en lugar de limitarse a perseguir a los criminales. El discurso oficial enfatiza la coordinación interinstitucional y los programas sociales



Memoria que
busca, Tuxtla
Gutiérrez,
septiembre de
2025
© SIPAZ

ligados al bienestar y desarrollo para jóvenes como parte del enfoque preventivo. No obstante, desde la llegada a la presidencia de Claudia Sheinbaum, se han observado cambios en las detenciones de integrantes de la delincuencia organizada, en el combate a la extorsión, en la incautación de droga y en la destrucción de laboratorios en varios puntos del país. Al mismo tiempo, sigue el énfasis en el componente punitivo y militarizado. En varios estados, esta estrategia más frontal ha generado mayor violencia. En este sentido, un caso reciente de secuestro y muerte de mineros en Sinaloa elevó las preocupaciones sobre la eficacia de las políticas de seguridad federales.

Las fuerzas armadas siguen siendo desplegadas en tareas de seguridad ciudadana y de lucha contra el crimen organizado. Esta participación militar es objeto de críticas constantes de organizaciones de derechos humanos, que señalan que, cuando el ejército asume funciones de seguridad pública prolongadas y sin supervisión civil efectiva, se generan abusos, ejecuciones extrajudiciales y obstáculos para la rendición de cuentas. La transferencia de control de la Guardia Nacional al Ejército se ha consolidado, un cambio que para sus críticos profundiza la militarización de la seguridad pública en México.

En todo caso, la ejecución de la visión y las estrategias federales enfrenta retos estructurales por la magnitud de la violencia, la presencia de cárteles en muchas regiones y los niveles de impunidad, ello a pesar de la reforma judicial promovida por Sheinbaum en 2025.

En noviembre, Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia como fiscal general de la República, dejando el cargo después de casi siete años, pese a que su mandato estaba previsto para nueve. Antes de irse, dejó encaminada la transición dentro de la FGR, que quedó en manos de Ernestina Godoy —consejera jurídica de la Presidencia y figura cercana a Claudia Sheinbaum—, mientras el Senado selecciona a la persona que ocupará el puesto de forma permanente.

Diversas organizaciones civiles criticaron que Gertz abandonara la institución “*sin rendir cuentas*”, señalando que su partida estuvo marcada por la falta de transparencia. Además, dejó pendientes numerosas investigaciones de gran relevancia que no alcanzaron sentencia ni conclusiones firmes. Entre ellas figuran casos de corrupción, contrabando de combustibles —conocido como “*huachicol fiscal*”—, anomalías en aduanas, operaciones de lavado de dinero, posibles actos de peculado y expedientes que involucran a personajes y

empresas de alto perfil, entre otros.

Derechos humanos: preocupaciones y casos recientes

El 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, más de cien organizaciones, redes, colectivos y personas defensoras alertaron sobre la persistencia de problemas estructurales graves que impiden el pleno ejercicio de los derechos humanos en el país y plantearon un amplio diagnóstico de los pendientes actuales.

Una de las principales preocupaciones planteadas fue la situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes enfrentan un contexto de violencia creciente. En 2025 se registraron al menos 6 periodistas y 14 personas defensoras asesinadas por su labor. La impunidad, la falta de respuestas institucionales y la ausencia de políticas de protección con enfoques de género, interseccional y territorial incrementan los riesgos, especialmente para comunidades indígenas y organizaciones que defienden el medioambiente, el agua y los derechos colectivos. A esto se suma la criminalización del periodismo, cuestionaron los firmantes, mediante figuras legales como el ciberrasedio o los delitos contra el honor, así como leyes recién

tes que, por su redacción amplia, amenazan la libertad de expresión y el uso de medios digitales.

También señalaron que la desaparición forzada continúa siendo una de las crisis más graves de derechos humanos. Aunque existen iniciativas legislativas, estas resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. Al 30 de septiembre de 2025, se registraban más de 132.000 personas desaparecidas y no localizadas, con un promedio alarmante de 45 desapariciones diarias solo en septiembre de ese año. La crisis se agrava por la falta de políticas de prevención, la ausencia de una estrategia integral de búsqueda y la grave crisis forense, con más de 72.000 restos humanos sin identificar. En este contexto, las mujeres buscadoras han asumido tareas

que corresponden al Estado, enfrentando riesgos extremos; al menos 30 familiares de personas desaparecidas han sido asesinadas, la mayoría mujeres.

También se señaló la falta de una regulación sólida en materia de empresas y derechos humanos, indispensable para prevenir los impactos de megaproyectos y actividades extractivas en los territorios y comunidades. Esta omisión resulta especialmente preocupante ante el impulso a nuevas inversiones mediante el Plan México, que no fue consultado con las comunidades afectadas y que promueve proyectos con impactos negativos en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

De igual forma, sigue pendiente la aprobación de una Ley General sobre desplaza-

Memoria que busca, Tuxtla Gutiérrez, septiembre de 2025
© SIPAZ



miento forzado interno, pese al aumento de este fenómeno en varios estados del país, denunció el comunicado.

La protesta social continúa enfrentando represión, uso excesivo de la fuerza y marcos normativos restrictivos, además de estigmatización desde el poder. Las organizaciones también cuestionaron la estrategia de seguridad federal, señalando que la militarización y el despliegue permanente de la Guardia Nacional no han mejorado la seguridad y han ampliado de forma preocupante el poder de las fuerzas armadas sin controles adecuados.

Respecto a grupos históricamente vulnerabilizados, persisten deficiencias en la protección de las infancias, juventudes, personas LGBTQ+, pueblos indígenas y mujeres. En el caso de estas últimas, las cifras de feminicidios, homicidios y desapariciones reflejan una crisis sostenida de violencia, agravada por la impunidad y la falta de políticas integrales de prevención, pese a algunos avances institucionales recientes.

Finalmente, se expresaron preocupaciones sobre el acceso a la justicia, la reforma al Poder Judicial, la persistencia de la tortura, el uso excesivo de la prisión preventiva, la criminalización de la migración y las condiciones inhumanas en los centros penitenciarios. Ante este panorama, las orga-

nizaciones exigieron que el próximo Plan Nacional de Derechos Humanos incorpore las recomendaciones internacionales, establezca acciones concretas y garantice espacios permanentes de diálogo, evaluación y rendición de cuentas, con el objetivo de transformar de manera estructural la situación de los derechos humanos en México.

CHIAPAS: Choques de visión sobre la situación en el estado

En diciembre, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, presentó su Primer

Informe de Gobierno y afirmó que en tan solo un año su administración logró avances que muchos consideraban imposibles: restaurar la paz, el Estado de derecho y el buen gobierno en un estado que se encontraba sumido en una fuerte ola de violencia generada por disputas entre grupos del crimen organizado.

Comentó que antes de su llegada, Chiapas vivía asesinatos, balaceras, cuerpos colgados, decapitados y asaltos carreteros. Ramírez atribuyó el cambio a la nueva estrategia de seguridad implementada junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario

Peregrinación
del Pueblo
Creyente de la
diócesis de San
Cristóbal de las
Casas, enero de
2026
© SIPAZ





de Seguridad federal Omar García Harfuch, las Fuerzas Armadas y las instituciones estatales y federales encargadas de la procuración de justicia.

Informó que durante su primer año se detuvieron a alrededor de 6.000 personas, de las cuales 5.000 continúan bajo proceso. Reconoció al Poder Judicial del estado por no liberar a presuntos delincuentes como, dijo, ocurría anteriormente. También se presentó un video con las inversiones realizadas: un helicóptero Black Hawk, vehículos blindados, drones, cámaras de videovigilancia, bases móviles y aumentos salariales para policías.

Además del tema de seguridad, el gobernador destacó avances en educación, salud, medioambiente, turismo e infraestructura. Entre ellos, un programa de alfabetización, el inicio de la autopista Palenque-San Cristóbal de Las Casas, la reconstrucción de carreteras, la creación de la aerolínea Balam para conectar a Chiapas con otros estados y programas de becas y apoyo alimentario para sectores vulnerables.

Para el próximo año anunció nuevas acciones: impulso a los Polos del Bienestar, apoyos a productores de café, maíz y pesca, becas a estudiantes y deportistas, incorporación de artesanos a la seguridad social, restauración

de microcuencas, programas para mujeres, obras públicas con empresas locales y bajo criterios de transparencia. Ramírez afirmó que *“Chiapas ha despertado”* y que el estado avanza para convertirse en el *“gigante del sur”*. Reconoció que aún existen retos históricos —pobreza, desigualdad, conflictos agrarios, rezago educativo, deficiencias en servicios básicos, violencia y discriminación hacia pueblos indígenas—, pero aseguró que su gobierno seguirá trabajando para enfrentarlos.

Este panorama esperanzador choca con el que perciben las organizaciones de derechos humanos, que señalan que persiste la violencia y que la militarización de la seguri-

Encuentro
zapatista “De
Pirámides,
Historias,
Amores y, claro,
Desamores”,
diciembre de
2025
© SIPAZ

ACTUALIDAD

dad no ha solucionado los conflictos estructurales. En diciembre, el Grupo de Trabajo Región Frontera, formado por varias organizaciones civiles, publicó el informe preliminar *“Chiapas 2025: La paz pendiente”*. *“El gobierno estatal ha apostado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) como eje de la estrategia de pacificación, su actuación ha profundizado la militarización de la región y ha generado nuevos riesgos para la población civil como detenciones arbitrarias y abusos de autoridad”*, declara. Además, detalla que el desplazamiento forzado sigue siendo una constante, afirman las organizaciones. Entre 2023 y 2024, más de 8.000 personas fueron expulsadas de sus comunidades; aunque muchas regresaron en 2025, lo hicieron sin condiciones reales de seguridad. Otras continúan desplazadas o viven un desplazamiento intermitente, moviéndose entre sus comunidades y otros municipios o incluso Guatemala, ante amenazas persistentes y presencia de grupos armados. Otro foco crítico que señala el informe es el aumento de las desapariciones forzadas. En 2025 se registraron al menos 29 personas desaparecidas en municipios fronterizos, principalmente en Frontera Comalapa y La Concordia, aunque se reconoce un fuerte subregistro por miedo a denunciar. *“La paz en Chiapas sigue pen-*



diente. La persistencia de la violencia, las desapariciones, el desplazamiento forzado y la ausencia de datos oficiales confiables invisibilizan a las víctimas y dificultan la construcción de políticas públicas efectivas, dejando a las comunidades fronterizas en un escenario de miedo, incertidumbre y abandono institucional”, concluye el informe.

Desde esta misma zona, igualmente en diciembre, el Pueblo Creyente de Chicomselo expresó su preocupación por la normalización de la violencia y la contradicción entre el discurso oficial que habla de pacificación y la realidad cotidiana que enfrentan las comunidades. Afirmó que el estado *“está bañado con la sangre de personas inocentes”*, víctimas de masacres, desapariciones, secuestros, desplazamientos forzados y asesinatos derivados de la lucha territorial entre grupos criminales. *“El relato de que la paz ha llegado a Chiapas no se sostiene en la realidad. La paz no se impone por decreto, sino que se construye con justicia, verdad y el reconocimiento de la dignidad de los pueblos”*, dijo.

De manera más amplia, el 25 de enero se llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas la tradicional Peregrinación del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal para honrar la memoria de Samuel Ruiz García, jTatik Samuel, a 15 años de su muerte. Más de 10.000 personas de diferentes

municipios de Chiapas exigieron paz y justicia para los pueblos. Declararon que *“seguimos denunciando la violencia que se sigue dando en algunos municipios de nuestro Estado de Chiapas por parte del crimen organizado, con enfrentamientos armados, asesinatos, desapariciones, ‘levantones’ (secuestros), ‘cobro de piso’, intimidaciones a los habitantes de comunidades de esos municipios, obligación a asistir a eventos públicos o a poner retenes de vigilancia simulada y de no hacerlo se les impone una multa. Todo lo anterior provoca desplazamiento forzado interno. Los pueblos callan por miedo y temor de que les arrebaten la vida”*.

Entre diciembre y febrero, se reportaron múltiples incidentes violentos, incluidos asesinatos, enfrentamientos, quema de vehículos y desapariciones en otra zona, Villaflores, que estarían relacionados con un conflicto entre dos grupos del crimen organizado que se disputan el control territorial de esta región que conecta la Sierra Madre con el centro del estado. También se reportó la aparición de cuerpos desmembrados en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. El gobierno del estado implementó varios operativos y procedió con algunas detenciones; la más importante fue la de un sujeto conocido como *“El Espíritu”*,

al que las autoridades ubican como *“jefe de plaza”* en varias zonas de Chiapas. La promesa de reforzar los retenes y filtros de seguridad en Tuxtla Gutiérrez y en todo el estado no ha terminado de reducir el miedo de que la disputa de plazas vuelva a activarse de forma más agresiva.

Procesos organizados continúan movilizándose

Además de las peregrinaciones ya mencionadas, en noviembre se llevaron a cabo una serie de actividades en el marco del 12º aniversario del Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (MODEVITE), en San Juan Cancuc,

Pág. 10:
12º aniversario
del Movimiento
en Defensa de
la Vida y del
Territorio
(MODEVITE), en
San Juan
Cancuc,
noviembre de
2025
© SIPAZ

Peregrinación
de la
Coordinación
Diocesana de
Mujeres
(CODIMUJ), San
Cristóbal de las
Casas, 25 de
noviembre de
2025
© SIPAZ





Peregrinación de la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), San Cristóbal de las Casas, 25 de noviembre de 2025
© SIPAZ

marco en el que exigieron entre otras cosas que el Estado mexicano respete su derecho a la libre determinación, la autonomía y sus sistemas normativos propios; que se cancele definitivamente el proyecto de la autopista San Cristóbal-Palenque; que se detengan los megaproyectos extractivistas en todo el territorio maya, zoque y chol; y que en los espacios internacionales como la COP 30 se escuchen las voces de los pueblos originarios y se reconozca su papel fundamental en la defensa de la Madre Tierra.

Desde el 26 de diciembre de 2025 hasta el 1° de enero de 2026, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) celebró el 32° aniversario del alzamiento zapatista en el CIDECI en San Cristóbal de Las Casas y luego en el

Caracol de Oventik. En todas las sesiones del semillero *“De Pirámides, Historias, Amores y, claro, Desamores”* participaron el subcomandante insurgente Moisés y el capitán Marcos. Pidieron a sus invitados hablar sobre *“las pirámides y los manejos de las historias en el sistema económico, los malos gobiernos, las leyes y la estructura judicial, los movimientos de resistencia, las izquierdas y el progresismo, los derechos humanos, la lucha feminista y las artes”*.

El programa contempló una serie de encuentros con intelectuales, activistas y miembros de la sociedad civil. El momento central de la celebración tuvo lugar el 31 de diciembre en el Caracol de Oventik, donde se conmemoró el levantamiento de 1994.

Sectores particularmente vulnerables ante la violencia: mujeres, niñas y personas defensoras de derechos humanos

El 25 de noviembre de 2025, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, peregrinaron alrededor de 800 integrantes de la Coordinadora Diocesana de Mujeres (CODIMUJ) en San Cristóbal de Las Casas para exigir que cese la violencia en su contra. En Tuxtla Gutiérrez, denunciaron que, pese a las campañas institucionales y discursos oficiales, en Chiapas persisten la impunidad, los feminicidios, las desapariciones y la violencia sistemática contra mujeres y niñas. Para diciembre, la Colectiva Feminista 50 más 1 tenía registrados al menos 31 casos de feminicidios en 2025.

Por otro lado, de acuerdo con la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias), en 2025 la Fiscalía General del Estado emitió aproximadamente 460 fichas de búsqueda por la desaparición de niñas, niños y adolescentes (NNA), lo que representa más de un caso diario. La información indica que el grupo más afectado es el de adolescentes de 15 años, principalmente mujeres (siete de cada diez reportes). Redias también subrayó que durante 2025 se

documentaron 16 homicidios, 9 feminicidios, 328 denuncias por pederastia, la deportación de 635 niñas, niños y adolescentes chiapanecos desde Estados Unidos, así como la detención de 8.656 menores migrantes en el estado, de los cuales 876 fueron retornados a sus países de origen.

Finalmente, en enero, el conversatorio *“La situación de las personas defensoras de derechos humanos en Chiapas: los retos de su protección”* permitió visibilizar la vulnerabilidad de este sector. Participó la relatora especial de la ONU sobre personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, quien después de haberse reunido con personas defensoras de derechos humanos afirmó, entre otras cosas, que *“no hay seguridad para personas defensoras en Chiapas”*, pues el

gobierno mexicano *“está pintando, simulando la paz”* y *“la militarización, el crimen organizado, los megaproyectos y la criminalización de las personas defensoras les pone en riesgo”*. Asimismo, señaló que hay varias personas en el estado que *“quieren la paz, pero están paralizadas por el miedo”*.

En el caso más reciente de esta vulnerabilidad, en febrero, la defensora de derechos humanos Poulette Celene Hernández fue víctima de agresiones físicas, amenazas de muerte y actos de hostigamiento en el municipio de Tonalá. De acuerdo con documentación del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, el 8 de febrero, tres personas acudieron a su domicilio, donde la insultaron, amenazaron y agredieron físicamente. Un día antes, el 7 de

febrero, posiblemente por la presencia de otras personas en la casa, cuatro sujetos en motocicletas llegaron al exterior de su vivienda y lanzaron amenazas antes de retirarse, en lo que se considera un acto de intimidación previo. Poulette Celene Hernández es abogada y trabaja con mujeres en la costa de Chiapas, acompañando a víctimas de violencia y promoviendo procesos de formación en derechos humanos, salud comunitaria y agroecología. Su labor se desarrolla en un contexto de alta conflictividad social, marcado recientemente por denuncias relacionadas con el Corredor Interoceánico y presunta colusión entre autoridades y grupos delictivos ■

Reunión con la relatora especial de la ONU sobre personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, San Cristóbal de las Casas, enero de 2026
© SIPAZ



Megaproyectos ferroviarios en el sureste

Violaciones a derechos, impactos socioambientales y militarización en nombre del desarrollo



En las últimas dos décadas, México ha impulsado grandes proyectos de infraestructura bajo el discurso de desarrollo regional, modernización y bienestar. El Tren Maya (que conecta Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (del cual el Tren Transístmico forma parte) son ejemplos emblemáticos de esta política. Si bien las autoridades han promovido estas obras como palancas de crecimiento económico y cohesión social, diversos informes de organizaciones civiles, expertos y defensores de derechos humanos del territorio y del medioambiente han documentado violaciones sistemáticas a derechos de pueblos indígenas y locales, impactos ambientales severos y un patrón de hostigamiento y criminalización a comunidades defensoras del territorio ■

Tren Maya

Este megaproyecto ferroviario fue impulsado originalmente por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO, 2018-2024) con la intención de conectar los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Oaxaca, abarcando cerca de 1.500 kilómetros, para fomentar el turismo, el empleo y la integración regional.

Según el historiador Lorenzo Meyer, esta obra está pensada para *“compensar la falta de crecimiento económico que se dio sobre todo en el siglo XX en el norte y centro de México. La región del sureste siempre ha quedado relegada y el Tren Maya es la*

primera gran obra de infraestructura desde hace más de medio siglo”. Es por ello que se considera uno de los proyectos insignia del gobierno de AMLO y al que se han invertido al menos 20.000 millones de dólares.

El proyecto ha sido promovido como una obra de infraestructura estratégica y prioritaria para el país; no obstante, ha estado envuelto en múltiples controversias debido a su planeación y ejecución. Ante las críticas, AMLO declaró en diversas ocasiones que éstas *“se debían simplemente a la envidia y enojo de la oposición”* y, en 2023, ante demandas y amparos impuestos por organizaciones ambientalistas, declaró la obra como un asunto de seguridad nacional. *“Ya se decidió que es un*

asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo”. Por lo mismo, la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer que la información técnica vinculada con los impactos ambientales derivados de la construcción del Tren Maya se mantendrá confidencial por un periodo de cinco años.

Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)

Es una infraestructura que busca competir directamente con el Canal de Panamá. Pretende modernizar la ruta ferroviaria exis-

tente entre Salina Cruz (Oaxaca) y Coatzacoalcos (Veracruz) para facilitar el transporte de mercancías y personas entre el Pacífico y el Golfo de México, además de crear zonas industriales y polos de desarrollo logístico, de infraestructura portuaria, industrial y energética. El objetivo oficial es convertir esta región en un centro logístico global y facilitar el traslado de mercancías, gas y productos como minerales y petróleo con menores tiempos y costos frente a otras rutas tradicionales. Con ello apunta a atraer inversión extranjera y a fortalecer el papel de México en las cadenas internacionales de suministro. Si bien desde el inicio se ha planteado como un proyecto innovador que traerá grandes beneficios al país, su avance ha generado conflictos con comunidades

locales y pueblos indígenas que habitan la región

Polos de Desarrollo del Bienestar

Ambos proyectos han sido presentados como motores de desarrollo económico regional y son parte de una estrategia más amplia de inversión pública y privada, y están orientados a “integrar” regiones aisladas e impulsar la economía con infraestructura de gran escala. Incluyen también los Polos de Desarrollo del Bienestar (Podebi): Son zonas geográficas delimitadas que gozarán de condiciones especiales y ventajas fiscales, cuyo objetivo es atraer inversiones y mejorar las capacidades productivas regionales. Durante su gobierno, AMLO proyectó diez polos a lo largo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y en

diciembre de 2023 se anunciaron otros dos que se asentarían en Chiapas.

Actualmente, con el gobierno de Claudia Sheinbaum, los Podebi aparecen como punta de lanza del desarrollo de infraestructura orientada a fomentar la atracción de nuevas inversiones productivas en el sector industrial en diferentes estados de la República.

Si bien para el gobierno los Podebi representan una oportunidad para que México retome una estrategia de política industrial que posibilite el desarrollo regional con base productiva, no queda claro su futuro, pues a la fecha, algunas firmas a las que se les había encargado su construcción han renunciado, no hay avances ni se han generado los empleos prometidos. Además, la información sobre estos proyectos es muy limitada ■

Despojo e irregularidades en los procesos de consulta e implementación

Tanto ante el Tren Maya como ante el Tren Interoceánico, se ha denunciado la falta de consulta “previa, libre, informada y culturalmente adecuada” a los pueblos indígenas y comunidades locales de acuerdo con estándares internacionales, como los establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ratificada por México.

En el caso del Tren Maya, relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas

(ONU) enviaron una carta dirigida al gobierno mexicano, en la que señalaron no sólo la falta de consulta adecuada, sino también los riesgos de desalojo, desplazamiento y expulsiones, así como los impactos ambientales y la pérdida cultural e histórica que podrían sufrir los pueblos afectados.

En el Istmo de Tehuantepec, testimonios recabados por organizaciones han reportado el despojo de tierras a comunidades indígenas, lo que ha implicado también desplazamiento forzado. Han denunciado que existen presiones para aceptar compensaciones económicas insuficientes y fracturas comunitarias genera-

das por la imposición de obras sin consentimiento real ni negociación justa.

"Tenemos derecho a vivir en nuestro territorio, a vivir de nuestros bosques, de nuestros mares, de nuestras tierras. No queremos sus proyectos, queremos nuestras vidas", ha declarado Bettina Cruz, defensora de la tierra binnizá (zapoteca) y miembro de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDIT).

Aunado a esto, diversas organizaciones han denunciado fallas e irregularidades en la construcción. En este sentido, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), tras el descarrilamiento del Tren Transístmico ocurrido entre la población de Nizanda y Chivela en Oaxaca el pasado 28 de diciembre de 2025, recordó que *"las irregularidades y violaciones a los derechos de los pueblos en el diseño y ejecución de las obras del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) del Corredor Interoceánico fueron denunciadas en diferentes momentos entre 2019 y 2025, incluido el uso de materiales «de mala calidad» y el volumen de la capa de balastro en el proyecto"*. Este accidente dejó un saldo de 14 personas muertas y 98 heridas.

Impactos ambientales y violaciones al derecho a un medioambiente sano y a la justicia

Desde el inicio de los proyectos, se han interpuesto diversas demandas legales por violaciones al derecho a un medioambiente sano. En el caso del Tren Maya, se ha denunciado que la evaluación de impacto ambiental no fue integral, con procesos fragmentados por tramos, lo que puede ocultar el impacto acumulativo de la obra en los ecosistemas.

Hoy en día, los impactos ambientales del Tren Maya han quedado evidenciados. Diversos informes señalan que el megaproyecto ha provocado la fragmentación de hábitats, deforestación significativa y riesgos para especies

endémicas al cruzar áreas de alta biodiversidad. Organizaciones ambientales han documentado que millones de árboles han sido derribados para la construcción de la vía, con impactos sobre suelos kársticos y fuentes de agua subterránea como cenotes y cavernas, esenciales para las comunidades locales y la biodiversidad regional. Peritajes y demandas legales han advertido que los daños ambien-

"No queremos sus proyectos, queremos nuestras vidas."

tales del Tren Maya podrían extenderse hasta 2050, afectando no solo el paisaje natural, sino también la vida cotidiana de las personas que dependen de los recursos naturales.

Además, organismos civiles han señalado que autoridades ambientales han obstaculizado juicios de amparo incluso frente a evidencia de impactos ambientales profundos, debilitando la protección de ecosistemas vulnerables. Apenas en días recientes, el Tribunal Colegiado concedió la suspensión definitiva y

La Selva no se vende
© GREENPEACE



ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevar a cabo acciones de verificación, inspección y protección frente a las obras del tramo 5 del Tren Maya, en respuesta al amparo interpuesto por la organización “Sélvame del Tren”. Ante esto, voceros del colectivo declararon que *“no es solo un logro legal. Es un mensaje claro: la naturaleza tiene derechos y la sociedad civil organizada puede incidir”*. Sin embargo, habrá que esperar para

"La naturaleza tiene derechos y la sociedad civil organizada puede incidir."

ver el cumplimiento real de dicha sentencia ante un proyecto que ya está en funcionamiento.

Por su parte, en el Istmo, aunque los datos públicos son menos extensos que en el caso del Tren Maya, informes de misiones civiles de observación detallan que la expansión del Corredor Interoceánico y sus parques industriales está transformando bosques, tierras agrícolas y zonas naturales, con consecuencias ambientales todavía en evaluación.

El Istmo es
nuestro
© SIPAZ



Impactos culturales y riesgos de gentrificación

Los megaproyectos de infraestructura de gran escala, como lo son el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, tienen efectos culturales profundos en las comunidades indígenas y rurales. En estos casos, el sureste de México alberga una gran diversidad de pueblos originarios que conservan sus lenguas, formas de vida y vínculos ancestrales con la tierra. La imposición de dichas obras amenaza con transformar no solo el paisaje físico, sino también las relaciones sociales y los modos de subsistencia tradicionales.

Investigaciones socioculturales señalan que, al imponerse modelos de desarrollo centrados en la economía global, las comunidades se enfrentan a una erosión de su identidad cultural, fragmentación de redes comunitarias y pérdida de control sobre decisiones territoriales que históricamente han sido colectivas.

Paralelamente, estos proyectos pueden impulsar dinámicas de gentrificación y especulación inmobiliaria. En zonas de Quintana Roo cercanas al Tren Maya se ha reportado el aumento de precios del suelo y de bienes raíces, lo cual generalmente tiene impactos en la población local y en residentes de bajos ingresos que terminan por desplazarse hacia la periferia. Existe también en estas áreas la tendencia a transformar mercados locales, impulsando la inversión externa y un turismo de alto costo que se vuelve inaccesible para la población local y nacional.

Militarización y control institucional de los megaproyectos

Un sello distintivo y controversial que ha sido clave en ambos megaproyectos es la participación directa de las fuerzas armadas; la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) son a quienes se les

"Las comunidades se enfrentan a una erosión de su identidad cultural y a la pérdida de control sobre decisiones territoriales que históricamente han sido colectivas."

encomendó no solo la construcción, sino también la operación y administración de dichos proyectos, así como los beneficios ligados a ellos.

Informes independientes señalan que la presencia militar ha generado una percepción de control y ocupación de espacios públicos bajo el pretexto de seguridad, lo cual puede limitar la capacidad de denuncia y supervisión por parte de comunidades y autoridades civiles. Estas acciones han sido descritas como violaciones de derechos humanos cuando se justifican mediante declaraciones de seguridad nacional.

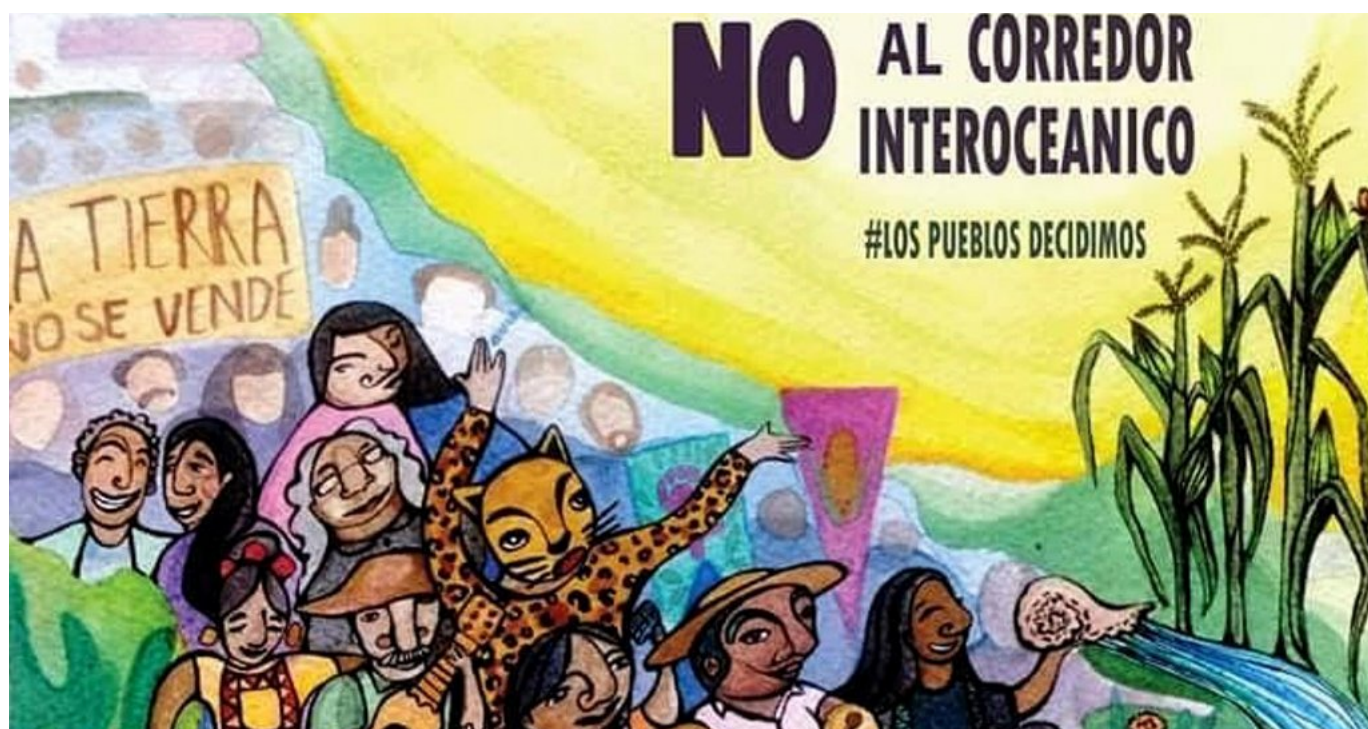
Además de la presencia militar, se ha documentado cómo las autoridades federales han

restringido la capacidad de las agencias ambientales para fiscalizar o clausurar obras con impactos ambientales graves. Claro ejemplo de esto fue la declaración del proyecto del Tren Maya como de seguridad nacional, lo que, como ya se mencionó, limitó o bloqueó estas posibilidades,

incluso cuando existían evidencias de daños como deforestación o uso ilegal de suelo.

Si bien durante su gobierno, López Obrador justificó además la presencia militar como una forma de garantizar la seguridad en las zonas, las cifras indican lo contrario. Diversos medios de comunicación han reportado en los últimos años un incremento de la violencia, consumo de drogas ilícitas, narcotráfico y presencia de grupos criminales. Por ejemplo, Proceso reportó en su edición de noviembre de 2023 *"la proliferación de cárteles a lo largo de la ruta del Corredor Interoceánico, entre Veracruz y Oaxaca, lo que significa violencia para muchos de los residentes locales"*. Un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recono-

© CEMDA





El Tren Maya es ecocidio y etnocidio
© TRIBUNAL INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA

ció que tres de los principales cárteles actúan en los cinco estados por los que pasa el Tren Maya.

Asimismo, militares han sido utilizados para reprimir protestas, violentar e intimidar a defensores. En febrero de 2024, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la policía estatal desalojaron violentamente a casi 50 ferrocarrileros jubilados, la mayoría entre 60 y 70 años, que protestaban en las vías del tren interoceánico en Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec. En esa ocasión, dos líderes ferrocarrileros fueron detenidos. Un año antes, en febrero de 2023, habitantes de Estación Sarabia, municipio de San Juan Guichicovi (Oaxaca), habían advertido sobre esto y realiza-

ron una protesta en contra de las intimidaciones que habían estado recibiendo por parte de los militares. Estos son solo algunos ejemplos de las dinámicas de poder y violencia que se están presentando alrededor de estos proyectos debido a la militarización y que preocupan por la impunidad y velocidad con que se reproducen.

Represión, agresiones y amenazas a defensores del territorio

Uno de los aspectos más preocupantes ha sido el aumento de violencia contra defensores del medioambiente y del territorio en México, con cifras elevadas de agresiones vinculadas directamente a la oposición a megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. De acuerdo con datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), se documentaron 282 agresiones contra defensores ambientales en 2023 en México, incluyendo homicidios, agresiones físicas y amenazas; el 57,7 % de estos casos afectaron a personas de pueblos indígenas, a menudo en el contexto de proyectos de desarrollo o extractivismo. El año 2024 cerró como uno de los años más letales, con al menos 25 defensores ambientales asesinados, un aumento del 25 % respecto a 2023. Según una investigación realizada por la Universidad Iberoamericana (IBERO), *"uno de los hallazgos más alarmantes es que el principal perpetrador de estas agresiones es el propio Estado mexicano, seguido de actores vinculados a empresas privadas y, en tercer lugar, el crimen organizado"*. De acuerdo con dicha investigación, el 44 % de las agresiones son atribuibles a fuerzas estatales, como policías

"El principal perpetrador de estas agresiones es el propio Estado mexicano, seguido de empresas privadas y el crimen organizado."



La tierra no se
vende
© SIPAZ

municipales y estatales, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina.

En la zona de la costa chiapaneca, familias de comunidades de los municipios de Arriaga y Pijijiapan han sido criminalizadas por defender sus territorios frente a las obras de la Línea K del Tren Transistmico del Corredor Interoceánico, implementadas por Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT). Este hecho ha sido denunciado por el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, el cual ha exigido el cese inmediato de la criminalización. Recientemente, la defensora de derechos humanos Poulette Celene Hernández, perteneciente al CDH Digna Ochoa, fue víctima de agresiones físicas y amenazas de muerte que podrían estar ligadas a su labor de defensa ante las obras del tren.

Otra de las violencias que han enfrentado defensores del territorio a causa de estos megaproyectos es la criminalización y el hostigamiento. En el contexto del Tren Maya, además de agresiones físicas, se han reportado intentos de sanciones legales, denuncias penales y desalojos forzados como represalia por la resistencia.

En el Istmo de Tehuantepec, se han señalado actos de violencia y detenciones arbitrarias contra personas defensoras de la tierra y el territorio frente al Corredor Interoceánico, además de presiones institucionales que afectan su libertad y seguridad. Tal es el caso del defensor David Hernández de la comunidad de Puente Madera, quien ha enfrentado órdenes de aprehensión y detenciones arbitrarias, en una de las cuales le fueron dictados 46 años de prisión. En algunos casos, defensores han



La Selva no se vende

© GREENPEACE

sufrido consecuencias fatales en el marco de disputas por tierras vinculadas al megaproyecto del Corredor Interoceánico. Por ejemplo, en el Istmo se reportó la muerte del activista zapoteco Noel López Gallegos, tras cuestionar la distribución de pagos por tierras, lo cual movilizó protestas y acusaciones de ruptura del tejido social por la imposición del proyecto. Una Misión Civil de Observación señaló que registró *“al menos 21 casos de intimidación, hostigamiento y amenazas contra personas defensoras, sus familias o colectivos; 11 casos de violencia física y psicológica, así como desalojos forzados; 3 homicidios de personas defensoras entre octubre de 2022 y julio de 2023; 2 casos de difamación a través de medios públicos de gran alcance; y 43 casos de denuncias penales a autoridades locales y personas defensoras comunitarias en las comunidades: San Juan Guichicovi, Mogoñé Viejo,*

Mogoñé Estación, Paso Real, Estación Sarabia, Tagolaba, y Puente Madera”.

Resistir pese a la indiferencia y la represión

Frente a estos megaproyectos y a pesar de los riesgos, han florecido múltiples resistencias tejidas desde la dignidad y la memoria colectiva. Pueblos mayas, zapotecos, mixes, zoques y campesinos, entre otros, han articulado asambleas comunitarias, policías comunitarias y redes para defender el territorio como espacio de vida y no como mercancía.

El Congreso Nacional Indígena, organizaciones locales de defensa del agua y la tierra, y articulaciones regionales en el Istmo, como *“El Istmo es Nuestro”*, y la Península han denunciado la falta de consultas libres y los impactos



sociales y ambientales de estos proyectos. A pesar de la criminalización, las campañas de deslegitimación y las amenazas provenientes tanto de actores estatales como del crimen organizado, estas comunidades continúan organizándose con una convicción profunda: *"La tierra no se vende, se ama y se defiende"*.

"Lo que sigue para nosotros es resistir. Vamos a declararnos pueblos en resistencia. Si es que va a correr sangre, ni modo, no nos queda otro camino. Y si es por eso que nos van a matar, muertos solamente van a lograr lo que quieren", o "Estamos luchando por la vida. Y no es vivir por vivir, sino vivir con dignidad. Es lo que queremos y por eso seguimos, es lo que nos levanta en los momentos en los que una dice que no puede más", son algunos testimonios que se recopilaron en el proceso de defensa de *"El Istmo es Nuestro"* ■

El Istmo es
nuestro
© SIPAZ

"Estamos luchando por la vida. Y no es vivir por vivir, sino vivir con dignidad."

COLABORE ECONÓMICAMENTE CON SIPAZ

Su contribución hace posible que SIPAZ continúe ofreciendo observación y presencia internacional en el sur de México.



En Europa:

A la cuenta de SIPAZ en Holanda
Nombre del Banco: ING Bank
A nombre de "Servicio Internacional para la Paz"
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL75INGB0004602969

En América del Norte:

SIPAZ, INC.
3849 17th Ave S.
Minneapolis, MN 55407, USA
E-mail: info_sz@sipaz.org
Tel.: (+1.530)-892-0662

SIPAZ

Tres décadas de presencia que acompaña y esperanza que florece

Entrevista a Jorge Santiago

"La obra de la justicia será la paz y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre". (Is. 32,17) (Versículo citado en el Comunicado del Pueblo Creyente, enero de 2026) y SIPAZ estará allí, levantando las banderas y cuidando las heridas de los pies cansados"

— Jorge Santiago



En el marco de nuestro 30º aniversario, hemos decidido sentarnos con personas que han conocido a SIPAZ a lo largo del camino. Una de ellas es Jorge Santiago Santiago, un reconocido defensor de derechos humanos, teólogo y acompañante pastoral en Chiapas. Su vida ha estado profundamente vinculada a los procesos sociales, eclesiales e indígenas que marcaron la historia contemporánea de la región, especialmente a partir del levantamiento zapatista de 1994. Su encarcelamiento en 1995, acusado de ser dirigente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), duró poco más de dos meses en una prisión de alta seguridad y tuvo un fuerte carácter político. Diversas organizaciones nacionales e internacionales manifestaron su solidaridad, lo que contribuyó a su liberación. Este episodio marcó profundamente su trayectoria, reafirmando su compromiso con la construcción de paz y la defensa de los derechos humanos. Actualmente, continúa apoyando distintos procesos y organizaciones en Chiapas. Su vida es testimonio de coherencia, resiliencia y esperanza en uno de los contextos más complejos de México.

SIPAZ: Nacimiento en tiempos de guerra

Desde una mirada tejida en años de compromiso, Jorge Santiago recuerda que SIPAZ nació en un contexto muy específico: en 1995, Chiapas era un territorio atravesado por el miedo; retenes militares en los caminos, comunidades vigiladas, presencia constante del Ejército, infiltraciones, paramilitarismo y masacres como la de Acteal, en 1997, marcaron una época en la que la palabra “paz” no era un ideal abstracto, sino una urgencia vital. En medio de ese contexto, nació el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ). Su nombre no fue casual: era una toma de posición frente a la violencia, una decisión de estar presentes como sociedad civil organizada allí donde la vida estaba amenazada.

SIPAZ nació en ese contexto, recuerda Jorge: como parte de una red más amplia de organizaciones nacionales e internacionales que entendieron que la presencia civil podía ser un factor de contención frente a la violencia. Inspirado por el trabajo pastoral y la mediación impulsada por figuras como Samuel Ruiz García, obispo de San Cristóbal de Las Casas y mediador en el diálogo, SIPAZ asumió una tarea clara: acompañar, observar, documentar y hacer visible lo que ocurría en las comunidades.

Treinta años después, SIPAZ no solo ha sido testigo de la historia contemporánea de Chiapas, subraya Jorge Santiago, *“ha sido parte activa de su transformación. Su presencia constante, discreta pero firme, ha contribuido a abrir espacios de diálogo, a documentar violaciones a derechos humanos, a acompañar procesos comunitarios y a sostener la esperanza cuando parecía que todo se desmoronaba”*.

“Ha sido parte activa de su transformación. Su presencia constante, discreta pero firme, ha contribuido a abrir espacios de diálogo, a documentar violaciones a derechos humanos, a acompañar procesos comunitarios y a sostener la esperanza cuando parecía que todo se desmoronaba”.

La fuerza de la presencia pública

Desde sus inicios, SIPAZ optó por una estrategia particular, recuerda Jorge: la visibilidad. En los años noventa, la presencia de observadores internacionales funcionaba como una suerte de “escudo”. Portar un chaleco, identificarse públicamente, emitir boletines y sostener relaciones con embajadas podía disuadir agresiones.

La lógica era sencilla: si el mundo estaba mirando, el costo político de la represión aumentaba. Durante los diálogos en San Andrés, la sociedad civil organizada rodeó la catedral y los espacios de negociación. Había periodistas, cámaras, representantes internacionales. La paz no era solo un asunto entre el Estado y el EZLN: era una causa colectiva.

SIPAZ entendió que su voz pública era parte de su responsabilidad, afirma también Jorge: *“Cada boletín, cada informe, cada visita a embajadas contribuía a mantener a Chiapas en la agenda internacional. En tiempos en que la información era fragmentaria y a menudo manipulada, sistematizar datos y ofrecer análisis rigurosos se convirtió en una de sus mayores fortalezas”,* dijo Jorge.

“Una de las contribuciones más significativas de SIPAZ ha sido su capacidad de documentación y análisis. No se limita a denunciar hechos aislados; busca comprender procesos, identificar patrones, situar lo local en un marco global”.

Hoy, quienes revisan los treinta años de archivos de SIPAZ pueden reconstruir buena parte de la historia política y social de Chiapas desde 1995 hasta la actualidad, en español, inglés, francés y alemán.

Documentar para no olvidar; interpretar para actuar

“Una de las contribuciones más significativas de SIPAZ ha sido su capacidad de documentación y análisis. No se limita a denunciar hechos aislados; busca comprender procesos, identificar patrones, situar lo local en un marco global”, señaló Jorge.

Esta mirada estratégica ha sido parte de su “marca”: no conformarse con la superficie, sino

preguntarse siempre por las causas estructurales de la violencia. *“En un mundo saturado de información, la capacidad de discernir, contextualizar y ofrecer una lectura profunda es, en sí misma, un acto de construcción de paz”,* afirmó. *“En un mundo interconectado, la paz también debe pensarse en clave global”,* añadió.

Acompañar sin protagonismo

SIPAZ ha cultivado un estilo particular, recalca Jorge también: acompañar sin apropiarse de los procesos. Ha estado cerca de espacios como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ha colaborado con instancias eclesiales, ha participado en plataformas por la paz y ha respaldado iniciativas comunitarias, pero rara vez busca el protagonismo.

En lugar de imponer agendas, escucha. En lugar de hablar por otros, amplifica voces. Acompaña procesos educativos, encuentros de análisis, reflexiones colectivas. Apoya la formación, la sistematización, la articulación entre actores. *“Este enfoque ha permitido que SIPAZ sea percibido no como un actor externo que llega a dirigir, sino como un aliado confiable”,* concluyó Jorge.

Una organización con rostro femenino

En los últimos años, SIPAZ ha vivido una transformación significativa: su equipo se ha integrado mayoritariamente por mujeres. Lejos de ser una anécdota, esta composición ha marcado un estilo de trabajo caracterizado por la colaboración, la sensibilidad intercultural y la apertura espiritual.

En un estado donde las mujeres indígenas han liderado procesos comunitarios y resistencias silenciosas, la presencia femenina en SIPAZ ha reforzado una ética del cuidado: el cuidado de la palabra, de los procesos y de las relaciones.

La paz no se construye solo en mesas de negociación; también se teje en encuentros,

ceremonias, espacios de escucha y diálogo interreligioso. SIPAZ ha sabido abrir esos espacios en los que caben católicos, evangélicos, personas sin afiliación religiosa, pero con una búsqueda común: la vida digna.

Memoria y futuro: entre desafíos y esperanza

Si en los años noventa la violencia estaba claramente asociada a un conflicto entre el Estado y el EZLN, hoy el panorama es más complejo. El crimen organizado, las disputas territoriales, la migración forzada y las economías ilícitas han transformado el escenario. Ante este escenario, SIPAZ ha tenido que repensar su forma de acompañar. Más que actuar como un escudo visible, ha optado por fortalecer redes, profundizar análisis y generar espacios de articulación.

El desafío de SIPAZ hacia el futuro es *“no perder lo ganado: esa capacidad de análisis profundo, esa visión estratégica, esa fidelidad a los*

pueblos que luchan por alternativas sistémicas frente a la violencia y el despojo”, reflexiona Jorge.

Pero también *“está llamado a dar un paso*

“Este enfoque ha permitido que SIPAZ sea percibido no como un actor externo que llega a dirigir, sino como un aliado confiable”.

más”, añade: a proponer con claridad su propia visión de paz, a generar espacios propios donde esa propuesta se haga visible, a convertir su experiencia acumulada en referentes que iluminen debates nacionales e internacionales. *“La esperanza que SIPAZ ha contribuido a sostener no es optimismo vacío. Es la convicción, construida día a día, de que otra realidad es posible”*, concluye ■



PRESENCIA INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO

CHIAPAS

NOVIEMBRE

♦ Visitamos a los presos de San Juan Cancun en la cárcel de San Cristóbal de Las Casas.

♦ Participamos en el Encuentro de constructores y constructoras de Paz, realizado en la comunidad Siberia, municipio de Chanal, por invitación de la Comisión de Apoyo a la Unidad Comunitaria y la Reconciliación (CORECO).

♦ Asistimos a la asamblea trimestral del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

♦ Asistimos a un encuentro convocado por la Pastoral de la Madre Tierra de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, realizado en el municipio de Huixtán.

♦ Participamos en una reunión con representantes de las zonas pastorales que forman parte de la Comisión de Seguimiento del Congreso de la Madre Tierra, componente de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

♦ Participamos en actividades realizadas en el marco del 12º aniversario del Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (MODEVITE), en San Juan Cancun.

♦ Acompañamos la peregrinación convocada por la Coordinadora Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), en San Cristóbal de Las Casas, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

DICIEMBRE

♦ Participamos en el 7º Encuentro Intercultural por Movilidades Libres y Elegidas, realizado en Las Margaritas.

♦ Visitamos la comunidad de San Francisco Teopisca con nuestra Junta Directiva.

♦ Nos reunimos con integrantes de la Misión Tojolabal en Comitán de Domínguez.

♦ Asistimos a la conmemoración del 28º aniversario de la masacre de Acteal en el municipio de Chenalhó.

♦ Asistimos a varias sesiones del Semillero *"De Pirámides, Historias, Amores y, claro, Desamores"*, convocado por el EZLN en San Cristóbal de Las Casas.

ENERO

♦ Asistimos a la conferencia de prensa en San Cristóbal de Las Casas, organizada por el colectivo *"Somos Fuego Feminista"*, en la que se denunció que la Fiscalía aún no ha hecho justicia y que ha revictimizado a las denunciantes en el caso de un intento de feminicidio ocurrido en febrero de 2023 en la Montaña de Don Lauro, al sur de la ciudad.

♦ Estuvimos presentes en el conversatorio *"La situación de las personas defensoras de derechos humanos en Chiapas: los retos de su protección"*, convocado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), el cual contó con la participación de la relatora especial de la ONU sobre personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor.

♦ Participamos en una reunión con representantes de las zonas pastorales que forman parte de la Comisión de Seguimiento del Congreso de la Madre Tierra, componente de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

♦ Acompañamos la peregrinación convocada por el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal para honrar la memoria de Samuel Ruiz García, jTatic Samuel, al cumplirse 15 años de su muerte.

♦ Nos reunimos con integrantes de la colectiva Madres en Resistencia.

FEBRERO

♦ Asistimos a la asamblea trimestral del Pueblo Creyente de

la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

♦ Nos reunimos con integrantes de la colectiva Madres Buscadoras de Chiapas.

♦ Estuvimos presentes en el evento convocado con motivo del 29º aniversario de la organización Melel Xojobal.

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN HACIA LA ACCIÓN

RELACIONES PÚBLICAS

♦ En enero, participamos en una reunión privada con la relatora especial de la ONU sobre personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, junto con otras organizaciones de la sociedad civil.

♦ Igualmente, en enero, nos reunimos con integrantes de la Embajada de los Países Bajos en la Ciudad de México.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ

NOVIEMBRE

♦ Compartimos un análisis con adolescentes y jóvenes que participan en el colectivo Mujeres de Maíz y provienen de varios municipios de Los Altos y la Selva Norte.

♦ Realizamos un taller de fortalecimiento del corazón con personas desplazadas de la zona Frontera, que se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez.

DICIEMBRE

♦ Presentamos una ponencia titulada *"Caminos de Paz en el contexto de América Latina y el Mundo"* en el Espacio Dialéctica, en el Museo jTatic Samuel Ruiz García.

ENERO

♦ Compartimos un análisis de la realidad con el equipo operativo del Seminario Intercultural Mayense (SIM).

♦ Co-facilitamos un taller con casi 200 servidores de la parroquia de Las Margaritas, junto con la organización El Rebozo.

CAPACITACIÓN INTERNA

♦ En diciembre, participamos en un Taller Regional sobre

Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos que se llevó a cabo en Uruguay, organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación Carolina.

ARTICULACIÓN

♦ Con una frecuencia mínima mensual, asistimos a reuniones plenarias y de comisiones de la Articulación por la Paz en Chiapas, Slamalil Kinal.

♦ Cada dos meses, asistimos a reuniones operativas del Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia (MPPJ).

♦ Mantuvimos reuniones con organizaciones que colaboran en el proyecto titulado *"Fortalecimiento de las capacidades de autoprotección de las organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades de Chiapas"*, que coordinamos junto con Voces Mesoamericanas y Huridocs.

♦ Como integrantes de la Plataforma por la Construcción de la Paz en México, participamos en reuniones mensuales de análisis y reflexión a partir de experiencias de buenas prácticas.

♦ En enero, participamos en el encuentro de copartes del programa de voluntariado alemán Welthaus, realizado en la Ciudad de México.

♦ En enero, participamos en una reunión de copartes de la Plataforma Global para la prevención de los conflictos armados (GPPAC, por sus siglas en inglés).

♦ En enero, participamos en la reunión de seguimiento a la Segunda Conferencia de Juventud, Paz y Seguridad convocada por el EEAS.

♦ En febrero, participamos en la reunión de la Coalición Latinoamericana de Juventud, Paz y Seguridad, donde la organización Dame un Chance compartió su experiencia de construcción de paz en Panamá

